

XXXIV Reunió Cercle d'Economia

Divendres 1 de juny

La propuesta del Cercle a debate

- **Inés Arrimadas**, Presidenta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos
- **Xavier Domènech**, Presidente del Grupo Parlamentario de Catalunya en Comú Podem
- **Lluís Font**, Diputado de Junts per Catalunya en el Parlament de Catalunya
- **Xavier García Albiol**, Presidente del Partido Popular de Catalunya
- **Miquel Iceta**, Presidente del Grupo Parlamentario Socialistes y Units per Avançar
- **Sergi Sabrià**, Presidente del Grupo Parlamentario Republicà
- **Antón Costas**, Presidente de la Fundación Cercle d'Economia

Inés Arrimadas inició el primer turno de palabra para valorar la propuesta del Círculo de Economía celebrando la ocasión de debatir con el resto de fuerzas parlamentarias catalanas por primera vez en seis meses. La ponente agradeció asimismo el ejercicio de reflexión de la entidad, del que afirmó estar de acuerdo en algunos puntos. Entre otros, coincidió en que la situación actual en Catalunya es principalmente un problema interno, en la importancia de la legalidad y la imposibilidad de una solución fuera de la misma o en que negar que lo que está ocurriendo afecta a la convivencia y a la economía es vivir de espaldas a la realidad. Arrimadas también se mostró partidaria de que el conjunto de España necesita reformas y de que, naturalmente, existe una solución a lo que está pasando.

En el capítulo de los matices a la propuesta del Círculo, la líder de Ciudadanos no consideró que se haya producido una judicialización de la política, porque en una democracia no es negociable que tengan que cumplirse las leyes, de modo que si un gobierno se salta reiteradamente el marco legal es normal que los tribunales actúen... A modo de ejemplo, la ponente indicó estar segura de que las empresas que incumplan el GDPR, de reciente aplicación, seguro que enfrentan importantes sanciones, y que por eso el uso por parte del gobierno que hizo el referéndum ilegal de los datos personales de millones de catalanes no puede quedar impune.

Desde ese punto de vista, Arrimadas señaló de hecho que un primer paso en la buena dirección consistiría en que el actual gobierno de la Generalitat se comprometiera a respetar la legalidad e hiciera autocrítica sobre las cosas que se han hecho mal, no solo en la estrategia independentista, sino en la gestión de determinadas competencias: retrasos en el desarrollo de infraestructuras, políticas de ocupación e inserción laboral fallidas, ineficiencia y duplicidades administrativas, corrupción...

En tercer lugar, la ponente echó en falta un diálogo interno que reconstruya puentes entre catalanes, porque instar directamente a la necesidad de un diálogo entre Catalunya y España es obviar un problema puertas adentro.

En ese diálogo, Arrimadas consideró que la postura de Ciudadanos es de sobras conocida: el partido no está de acuerdo en la independencia, pero, en cambio, sí cree poder ponerse de acuerdo con el resto de fuerzas políticas catalanas en casi cualquier cosa: la necesidad de un nuevo sistema de financiación, de reformar la administración, etcétera. Así lo acredita su pedigrí pactista, que, pese a las críticas, le ha permitido ponerse de acuerdo en distintos territorios con el PP, el PSOE...

La líder de Ciudadanos también consideró imperativo que el independentismo reconozca que Catalunya somos todos, y coincidió con un reciente artículo de Antón Costas en que el Presidente de la Fundación Círculo de Economía consideraba que la facción constitucionalista había cedido durante muchos años el protagonismo a los independentistas. En ese contexto, el 21-D dejó clara la auténtica diversidad catalana, en que la primera fuerza política no está de acuerdo ni con el referéndum ni con la independencia y en que las opciones que no llevan esta última en su programa obtuvieron más votos que las que sí.

Y, por último, Arrimadas instó a que todos hagamos un ejercicio de realismo como el que caracterizó a Ciudadanos cuando, a pesar de ganar las elecciones, afirmó que con la actual ley electoral existía una mayoría parlamentaria del independentismo. Esa mayoría, en cambio, niega realidades como que no podemos seguir así, que el *procés* no ha conseguido nada o que se ha fracturado la convivencia. Y el gobierno va más allá, puesto que lo integran personas que no consideran catalanes a los no independentistas.

Habló a continuación **Xavier Domènech**, celebrando la propuesta del Círculo por el mero hecho de querer buscar soluciones y que su debate se produzca en un día especial, en que se inicia una nueva etapa en la jefatura del estado cuyo nuevo presidente ya ha tendido la mano al gobierno de la Generalitat.

Al hilo precisamente de esa circunstancia, Domènech resaltó que ese nuevo gobierno central ha sido posible gracias a los votos de bloques irreconciliables en Catalunya, de modo que no debería ser imposible imaginar esas misas alianzas en clave catalana.

Entrando propiamente a valorar el contenido de la propuesta, el ponente se mostró de acuerdo en varios de sus aspectos: en primer lugar, en el agotamiento de la estrategia unilateral, que ha frustrado y excluido a una parte de la sociedad, pero también en el fracaso que ha supuesto la judicialización de la política, que evidencia que nada bueno puede salir cuando los políticos se ponen detrás de los jueces.

En cuanto a la propuesta concreta de que el Estatut tenga rango de constitución, el líder de Catalunya en Comú Podem afirmó que da mucho juego, porque podría agrupar a detractores de la independencia y a aquellos que la persiguen pero creen en fórmulas en que españoles y catalanes sigan compartiendo caminos.

Domènech no quiso obviar sin embargo la anomalía de que Catalunya sea la única comunidad del estado en que sus ciudadanos no disfrutan del estatuto votado por ellos mismos, a la que se refirió como a una distorsión democrática, e indicó que, a los efectos, la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010 vino a afirmar que los estatutos no forman parte del orden constitucional.

Para el ponente, esa sentencia y muchas declaraciones del bloque constitucionalista obvian que la Constitución de 1978 no establece si España es un país centralista o federal, sino que intenta adaptarse a muchas peculiaridades –por ejemplo, en la relación con Navarra, prácticamente un estado libre asociado, designando ciudades autónomas o fijando un régimen fiscal especial para Canarias– pero rehúye reconocer su plurinacionalidad y delega en el pacto territorial la relación entre las comunidades y el estado.

Domènech también echó en falta que la propuesta aborde factores adicionales a la sentencia de 2010 en su diagnóstico, como la intervención financiera de la Generalitat o la entrada en vigor del artículo 155, que recomiendan ir paso a paso pero que también

apuntan a la obsolescencia del modelo autonómico no ya en Catalunya sino en el conjunto de España.

Por eso es importante completar el texto constitucional, por ejemplo, en lo tocante a su artículo dos, decidiendo exactamente qué son y cuáles son esas nacionalidades y regiones de las que habla, y si realmente somos, como ha dicho estos días Pedro Sánchez, una “nación de naciones”.

De vuelta a la valoración de la propuesta del Círculo, el ponente agradeció su pragmatismo, pero consideró que, si vamos a modificar algunas leyes orgánicas, quizás deberíamos hacerlo con una visión más amplia e incluir también la del poder judicial, la del Tribunal Constitucional o la de los referéndums.

Y luego naturalmente está la reforma de la Constitución, con la que Domènech coincidió pero sobre la que afirmó estar menos preocupado que el Círculo en la fórmula, y más en cambio en qué pacto va a sustentarla. Y es que, de lo contrario, repetiremos la historia, en que España habla permanentemente de cómo reformar su Constitución pero esos cambios nunca se producen y el texto acaba colapsando y siendo reemplazado por otro.

Tomó la palabra **Lluís Font**, quien inició su intervención elogiando el aroma *schumpeteriano* de la propuesta del Círculo, a la que se refirió como a un texto académicamente atractivo que explica en parte lo que ha ocurrido en Catalunya. Sin embargo, el ponente lamentó que no viniera con otro membrete, porque, si en vez de una propuesta de la sociedad civil lo fuera del Gobierno de España, estaríamos ante el primer documento político que da respuesta desde el estado a lo que el propio Círculo denomina “el problema catalán”.

Si se diera ese caso, y teniendo en cuenta la nueva coyuntura en Madrid, el diputado de Junts per Catalunya consideró que elevaría exponencialmente el nivel del debate en torno a esta cuestión.

Realizada esta primera consideración, Font agradeció al Círculo haber pensado en mayúsculas, pero consideró que, pese a su interés, la propuesta presenta elementos mejorables o en los que podría haber profundizado más para explicar dónde estamos, y, sobre todo, dónde queremos estar.

Sí es cierto que reconoce que la sentencia de 2010 fue de todo menos anecdótica, que una mayoría de catalanes quieren votar sobre su presente y su futuro y que existe una distinción muy importante, y, sin embargo, a menudo obviada entre legalidad y legitimidad. Pero también presenta limitaciones: una, por ejemplo, es no reconocer que la judicialización de la política afecta al principio de legalidad, o que en Catalunya existe una fractura social que Font negó de plano, afirmando que en el actual contexto todo el mundo puede hacer públicas sus discrepancias.

El ponente tampoco coincidió con la visión del Círculo de que las dificultades para construir un gobierno después de las últimas elecciones sean imputables únicamente a las fuerzas soberanistas, sino que el factor 155 ha sido a todas luces relevante. Y, por último, Font consideró errónea la idea de que una solución como la propuesta por el Círculo vaya a hacer que la gente renuncie a la aspiración de ser independientes, y que además esa solución no puede desplegarse en una serie de despachos, sino que tiene que ser refrendada necesariamente por el voto de los catalanes.

El siguiente ponente, **Xavier García Albiol**, afirmó en primer lugar haber preparado su intervención todavía como representante del partido de gobierno en Catalunya, y que la

moción de censura y su desenlace le habían convertido en cambio en integrante del primer partido de la oposición, de modo que quiso evitar mirar atrás y centrar su intervención en el futuro.

Desde esa disposición, García Albiol discrepó de la afirmación de Lluís Font sobre que en Catalunya no existe fractura social, afirmando que él sí la ve a su alrededor cada día.

Hecha esta primera consideración, el presidente del Partido Popular de Catalunya valoró muy positivamente la propuesta del Círculo: un esfuerzo intelectual y social con el que afirmó compartir objetivos –fundamentalmente, la recuperación de la seguridad jurídica, la confianza empresarial y la convivencia–, pero discrepar en algunos de sus postulados.

Por ejemplo, el ponente se preguntó en voz alta a propósito del tema de las competencias de la Generalitat si de verdad creemos que el independentismo actual, liderado por Puigdemont en lugar por la Convergència de hace ocho o diez años, va a conformarse con tener un mayor control sobre la cultura o un mejor modelo de financiación. García Albiol se mostró muy escéptico a ese respecto, y consideró que el actual objetivo del independentismo es el ‘todo o nada’ y el ‘referéndum sí o sí’: una posición inamovible y motivada a estas alturas por no pocos intereses personales que impide un diálogo en que una disposición soberanista resultaría perfectamente legítima desde el punto de vista político e intelectual.

El ponente quiso referirse también a una cuestión conceptual obviada por el Círculo y por el resto de fuerzas políticas: que, mientras en el bando constitucionalista hay una coincidencia de base sobre que el marco constitucional, social y político no se puede romper y luego una gran diversidad de opciones sobre cómo conseguirlo, del lado de los independentistas existe una gran pluralidad ideológica de base y en cambio una empobrecedora coincidencia en la solución, que es pura y simplemente la independencia.

Por último, García Albiol dudó que Catalunya pueda proponer algo al conjunto de la sociedad española si no consigue antes un acuerdo de mínimos entre sus propias fuerzas políticas, y eso pasa por admitir la pluralidad ideológica interna y la necesidad de respetar unas mínimas normas de juego –para el ponente, la Constitución y el Estatut–, y por buscar por lo menos tres o cuatro aspectos coincidentes entre todos los partidos con representación en el Parlament.

Miquel Iceta inició su intervención considerando que, a la luz de los últimos acontecimientos de la política española, las jornadas del Círculo de este año no deberían llamarse “tiempos disruptivos, nuevos liderazgos” sino más bien “nuevos tiempos, liderazgos disruptivos”, y negando que, en su opinión, la propuesta que ha realizado la institución para Catalunya tenga los aromas *schumpeterianos* que apuntaba Lluís Font.

Hecho este primer apunte, Iceta resumió su valoración de dicha propuesta en su absoluta coincidencia en todo lo que dice, afirmó que presenta paralelismos con lo que su partido propuesto primero en la declaración de Granada y luego en la de Barcelona, y celebró que una entidad de la llamada sociedad civil se haya tomado el tiempo de reflexionar a fondo sobre lo que está pasando.

De entre las ideas con las que afirmó estar más de acuerdo, el presidente del Grupo Parlamentario Socialistes y Units per Avançar destacó que hoy hace falta un acuerdo entre catalanes previo a un pacto de estado, y que ese acuerdo ha de contar además con

el respaldo de dos tercios del Parlament, porque sin esa proporción de apoyos –que, sin duda, requerirá renuncias de unos y de otros– será imposible avanzar.

Iceta también coincidió con el Círculo en que el actual problema es de unas enormes dimensiones, que es en todo caso interno, y que, naturalmente, no podemos resignarnos a resolverlo, sino plantear un diálogo transaccional basado en el principio de respeto a la legalidad. Esto último es especialmente importante porque en Catalunya ya no tenemos que mirar a otros países para entender qué significa saltarse la ley, porque esa temeridad ya nos ha conducido a lo que el ponente tildó de desastre social con unos altísimos costes, para empezar, para quienes llevan hoy el lazo amarillo.

Iceta coincidió también con Lluís Font en que, una vez alcanzada esa postura interna de consenso respaldada por lo menos por dos tercios del Parlament hay que someterla a la validación de la ciudadanía, y con Domènech en que lo imperativo ahora es llegar a un acuerdo político y que ya veremos luego los mecanismos para hacerlo posible.

Entrando en todo caso en la hoja de ruta concreta propuesta por el Círculo, el ponente la consideró un poco ambiciosa, y que seguramente sea necesario conformarse con un estadio previo. En todo caso, Iceta no se mostró en desacuerdo con dar al estatuto una naturaleza constitucional, aunque alertó que el problema no es qué nombre le ponemos, sino que ese estatuto cumpla efectivamente con ese papel constitucionalista con arreglo a una regla que rige a muchos sistemas federales.

El representante de Socialistes y Units per Avançar también coincidió con la llamada de Arrimadas al pacto interno, convencido de que la solución al problema catalán no puede venir de la mano de una negociación entre dos gobiernos de parte, y con la propuesta del Círculo sobre reconocer a Catalunya como una identidad nacional, que el propio Iceta ha defendido en varias de sus publicaciones y en lo que parece estar también de acuerdo Pedro Sánchez, que un día antes afirmó que España era para él una nación pero que muchos españoles pensaban que sus regiones también lo eran.

Sobre qué fórmula puede permitir un acuerdo, el ponente afirmó desconocerla en la misma proporción en que la desconocían los autores del artículo segundo de la Constitución de 1978, pero consideró que un buen paso para empezar a estudiarla sería la constitución de una Comisión para reflexionar sobre la misma.

Y, mientras esa Comisión debate sin prisas, sin partidismos y con el objetivo de llegar a ese acuerdo respaldado por dos tercios del Parlament, los gobiernos catalán y español no solo pueden sino que deben hablar. Por ejemplo, de las famosas 46 demandas de Puigdemont, de las cuales Iceta afirmó discrepar solo con una, tildó de improbables otras cinco e indicó estar de acuerdo con las 40 restantes. Ocurre algo parecido con las 16 leyes impugnadas por el Constitucional, en que seguro que puede llegarse a acuerdos en clave nacional sobre las relativas, por ejemplo, a la pobreza energética o a la urgencia habitacional.

Por último, el ponente lamentó que algunos se lleven las manos a la cabeza cuando se plantean cambios en las leyes orgánicas o en la Constitución para un mejor encaje de Catalunya en España –cuando esos son mecanismos plenamente constitucionales que, eso sí, requieren consensos amplios– y mostró su coincidencia con varias de las ideas del Círculo sobre un hipotético nuevo modelo de financiación, en especial en lo tocante a la importancia de su ordinalidad o a la necesidad de coordinación entre agencias tributarias.

El último ponente de la sesión, **Sergi Sabrià**, dedicó el arranque de su intervención a lamentar que Oriol Junqueras, presente en las tres últimas ediciones de las Jornadas del Círculo de Economía, no pudiera disfrutar de la presente por llevar 211 días en prisión.

El presidente del Grupo Parlamentario republicano afirmó a continuación que la bandera de Junqueras es también la de Esquerra Republicana –la del diálogo y la vocación de participar en todos los debates–, pero que eso no obsta que su planteamiento como partido sea el que todos conocen: que el futuro de Catalunya pasar por constituirse en un país limpio y justo en manos de ciudadanos libres y justos.

Y, por eso, la búsqueda de un encaje en España o de una mejora en la financiación se les queda muy corta, porque consideran que lo mejor para los ciudadanos y también para la economía es contar con un estado que, de todos modos, los republicanos son conscientes que tardará más en llegar de lo que les habría gustado.

Sabrià reivindicó de hecho que esta ya era la postura de ERC en la década de 1990, en que suscitaba el apoyo de un 10% del electorado, y que no tenían intención de cambiar.

Sin embargo, además de por su firme convicción independentista, el ponente afirmó que su renuencia a negociar en los términos planteado por el Círculo también tiene que ver con el balance de la participación de ERC en muchas negociaciones previas con el estado –en especial aquellas que, pese a suscitar un enorme consenso en Catalunya, habían visto frustradas sus expectativas bien por decisión del Congreso o directamente de la justicia.

Pese a ello, Sabrià agradeció al Círculo no solo el trabajo en esta última propuesta sino sus esfuerzos a lo largo de las últimas seis décadas por proponer cosas incluso desde la discrepancia, y por ser siempre riguroso y favorable al diálogo. El ponente criticó sin embargo las alusiones en este último documento a una fractura social y de la convivencia que él consideró inexistente.

Sabrià apuntó a continuación que, en los últimos meses, la prioridad de ERC ha sido recuperar las instituciones porque, pese a que su dimensión autonómica las vuelve pequeñas, sí era necesario rescatarlas del 155 y del control de un partido que cuenta con solo cuatro escaños en el Parlament.

Logrado ese hito, los republicanos quieren además gobernar bien, hacer políticas sociales para ayudar a la gente y favorecer también a las empresas, en oposición a un estado que ha agredido físicamente a los catalanes y violentado su obligación de protegerles. Y es que, para el ponente, la vulneración de derechos y voluntades en Catalunya ha sido muy grave –como acredita que tengamos a cantantes en prisión o a medios de comunicación atacados–, y debería de hecho suscitar la complicidad y el apoyo de fuerzas no necesariamente independentistas pero que también defienden la libertad.

Tras realiza una llamada a no ignorar la petición de cambio de las movilizaciones ciudadanas en la calle, siempre pacíficas y cívicas, Sabrià consideró igualmente necesario ampliar la base social del independentismo incluso habiendo ganado las elecciones del 21-D y seguir luchando en el frente internacional a favor de los presos y exiliados, a quienes afirmó que los tribunales de otros países están brindando mejores garantías que los del estado.

A modo de cierre, el ponente volvió a reivindicar la tesis independentista de ERC y a indicar que el partido es consciente de que faltan todavía muchos pasos por dar.

En el espacio dedicado al debate, Arrimadas apuntó en primer lugar que solo aquellos que ven y se dirigen únicamente a la mitad de Catalunya pueden negar que hoy nos enfrentemos a una fractura social, y lamentó las declaraciones del Sr. Torra sobre que el lazo amarillo es el símbolo del gobierno porque implica gobernar solo para quienes también lo llevan puesto.

Por eso, la líder de Ciudadanos instó al resto de partidos a empezar por respetar a todos los catalanes –por ejemplo, condenando los ataques a sedes o las declaraciones de *personas non gratas* de aquellos con quienes discrepan políticamente.

Arrimadas también afirmó que el independentismo no solo se explica por la famosa sentencia del Constitucional, sino por cómo los sucesivos gobiernos de la Generalitat han aprovechado muchas de sus competencias para instalar la opinión de que la culpa de todo es de España y que aquí lo hacemos todo bien, lo cual le ha permitido escabullirse de crisis relacionados con su propia corrupción.

De vuelta a la sentencia de 2010, la ponente sí consideró un error que esta se produjera después de pasar por las urnas, cuando lo lógico habría sido un orden inverso de los acontecimientos.

Y, por último, Arrimadas consideró innecesario que el estatuto tenga entidad de constitución –porque el problema no es nominal, sino de concepto– y compartió con el público sus sospechas de que esa propuesta del Círculo ha gustado a Torra no tanto porque vea en ella una manera de que Catalunya siga en España y podamos tener por delante otras cuatro décadas de democracia, sino un preámbulo a su verdadero anhelo de independencia.

García Abiol, por su parte, inició su segundo turno de intervención afirmando que es difícil sentarse a hablar con alguien que no tiene un mínimo respeto por el marco de juego, y preguntó a los partidos independentistas si estaría dispuestos a sentarse a hablar de una hipotética reforma de la Constitución.

Antes de escucharla, el ponente se mostró escéptico sobre su contestación, apuntando que actualmente ERC y JxCAT parecen presos del personalismo de Puigdemont, algo que afirmó que algunos de sus representantes le habían confesado en privado que les incomodaba.

Por su parte, García Abiol sí se mostró dispuesto a sentarse a hablar de reformar la carta magna o el modelo de financiación –en este último caso, siempre que se respete un principio de solidaridad y con el objetivo de que no perjudique a las comunidades que más aportan, como ocurre ahora con Catalunya pero también con Madrid.

Domènech volvió a tomar la palabra para afirmar que, en su opinión, un diálogo sincero tiene solo dos reglas muy sencillas: el reconocimiento de los sujetos que participan en él y la posibilidad de hablar de todo. Y esas normas no se dieron por ejemplo en la Comisión de evaluación y la modernización del Estado, que en su propio nombre ya forzaba un determinado ámbito y una determinada solución a la cuestión.

El representante de en Comú Podem también se mostró sorprendido por la negativa tajante del PP al concepto de soberanía compartida, con el que no tienen ningún problema cuando lo plantea Europa pero sí cuando hay que compartir esa soberanía por abajo.

Por su parte, Font instó a dejar de hurgar en las contradicciones de las distintas facciones para reconocer en cambio que cada una representa un punto de vista y una identidad legítima que, en el caso de los independentistas, no puede atribuirse a un supuesto adoctrinamiento, sino a la evolución natural de un conjunto de personas adultas.

En su réplica, Sabrià lamentó que Ciudadanos siempre les ataque con el tema de la fractura, cuando parecen el partido más cómodo con ese presunto contexto de tensión social. También reivindicó la transversalidad del proyecto de ERC recordando que las leyes sobre vivienda o pobreza energética tumbadas por el Constitucional habría beneficiado igual a independentistas y no independentistas.

Por último, el ponente reconoció que Catalunya cuenta efectivamente con muchas competencias y capacidad de gestión, pero en cambio con poco margen de decisión, y mostró plena coincidencia con Domènech sobre cuáles son las condiciones de un diálogo sincero, que nunca puede iniciarse obligando a una de las partes a renunciar a su postura.

Iceta manifestó a continuación su disposición frente a los problemas de buscar soluciones en lugar de aprovecharlo para conseguir más votos, y reiteró que nos equivocamos si creemos que el problema en Catalunya es que algunas opciones no son legítimas: lo que pasa es que algunas, simplemente, no pueden tirarse adelante con el soporte de menos de dos tercios del Parlament.

En cuanto a las normas de un auténtico diálogo, el ponente coincidió en que no deben haber reglas salvo la aceptación del marco que se quiere cambiar.

Iceta recordó a continuación que las últimas elecciones en Catalunya las ganó una fuerza que no viene del catalanismo político, y que eso es algo que el independentismo parece no haber computado todavía... Simplemente, no ha asumido lo que eso representa, ni que, como apuntó Antón Costas en un artículo reciente, se ha roto un pacto tácito en Catalunya.

El representante de Socialistes y Units per Avançar rescató la idea del Círculo de crear una Comisión para el diálogo en el Parlament, la consideró un paso previo imprescindible para elevar luego sus conclusiones a nivel estatal y finalizó su segunda intervención admitiendo que los políticos pueden cometer errores, pero no repetirlos.

Domènech coincidió con su predecesor en el turno de palabra en que el Parlament ha de ser efectivamente el escenario de una Comisión para el diálogo, pero que en su contexto debemos tomar conciencia de que, además de 2 millones de ciudadanos que quieren la independencia, en Catalunya hay un 70% de la población que considera agotado el estado autonómico.